

ESTADO DE CORRUPCIÓN | EL MAGISTRADO SOSTIENE QUE EL PARTIDO PERCIBIÓ UN TOTAL DE 5,1 MILLONES DE EUROS

# CDC cobró comisión por adjudicar obras en una acequia del río Ebre

Según el juez del caso Palau, habría recibido un 2,5% de los 2,6 millones de euros que pagó a Ferrovial Agroman S.A. por el revestimiento. El otro 1,5% fue a parar a manos de Millet y Montull

EUROPA PRESS

El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep María Pijuan, ha cerrado la investigación del caso Palau sosteniendo que CDC recibió pagos a través de la institución musical de la empresa Ferrovial como comisiones por más de 5,1 millones de euros a cambio de «adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat».

Ferrovial presuntamente abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante a Millet y Montull por su intermediación. Se lo repartían con el 80 y 20% respectivamente.

Entre los trabajos que cita el juez está la adjudicación por Regs de Catalunya S.A., empresa pública de la Generalitat, de «las obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, en fecha 23 de noviembre de 2000 por 429.008,854 pesetas (2.638.496,35 euros).

Por tanto, lo que habría percibido CDC serían unos 66.000 euros (2,5%) y Millet y Montull, unos 40.000 (el otro 1,5%).

«Para evitar el descubrimiento de delito, en los años 2007 y 2009 Félix Millet –expresidente del Palau de la Música imputado–, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documenta-

ción falsa», sostiene el auto de conclusión de la instrucción e incoación del procedimiento abierto dictado ayer.

El juez mantiene al término de la investigación como «responsable civil subsidiario a título lucrativo» a CDC e imputados a Millet, a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; a su hija, Gemma Montull, al extesorero convergente, Daniel Osácar, y a otras 13 personas.

Los pagos que presuntamente recibió CDC de Ferrovial al menos desde 1999 se camuflaban como donaciones de esta empresa para patrocinar la Fundación Privada Orfeón Català-Palau de la Música Catalana, pero en realidad eran pagos de comisiones por obra pública adjudicada por el Govern y otras entidades públicas. En estas operaciones intervinieron presuntamente por parte de CDC su tesorero hasta 2005 Carles Torrent –ya fallecido–, su sucesor Daniel Osácar, y el destacado militante y diputado Jaume Camps, también imputado.

Actuaron además presuntamente con la ayuda de otros miembros del partido que mantenían contacto con los cargos públicos de la Generalitat –y otras instituciones– vinculados al partido, que tenían el poder de decidir las adjudicaciones de obra pública: «La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada», sostiene el juez.



El presidente de CiU y de la Generalitat, Artur Mas, conversa con el presidente fundador de CiU, Jordi Pujol. EFE

### EN QUE SE BASA EL JUEZ

## Agendas, ordenadores y testigos

■ El juez ha basado los indicios contra CDC en anotaciones encontradas en las agendas de los responsables de la institución, en los ordenadores y en la declaración de testigos. En las agendas del expresidente del Palau, Fèlix Millet, y de la responsable de las finanzas de la institución e hija del también imputado, Jordi Montull, se encontraron apuntes de reuniones periódicas entre el propio Millet, el exdiputado de CDC Jaume Camps, el extesorero del partido ya fallecido, Carles Torrent, y el responsable de Ferrovial Pedro Buenaventura. En los ordenadores de dos secretarias se encontraron varios documentos con el nombre 'Torrent', uno de ellos de septiembre de 2003 referido a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona «en el que consta el cálculo de una comisión del 4% sobre la participación de Ferrovial, comisión que se distribuye en un 3,5% para CDC y un 0,5% para Millet y Montull». El juez considera a CDC «responsable civil como participante a título lucrativo», y el partido tiene la sede embargada después de la fianza que el magistrado le impuso de 3,2 millones de euros.